

FECHA DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO. La fecha de la disolución es la fecha de la sentencia de divorcio. Una de las partes solicitaba que la fecha fuera una de estas tres **con efectos del 5/5/2019, fecha de la separación efectiva, o del acuerdo alcanzado en junio de 2019, o bien la fecha del auto de medidas provisionales de 1/10/19.** Denegando las tres porque **en el caso de autos no ha habido una separación de hecho prolongada en el tiempo** que haya desnaturalizado la institución del régimen económico de gananciales **Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 29 de junio 2021. Número Sentencia: 299/2021 . Ponente: [Emma Galcerán Solsona](#). Orien: [juzgado de violencia de genero](#)**

Cabecera: Divorcio contencioso. Violencia de genero. Disolucion de la sociedad de gananciales

En el recurso de apelacion se solicita que se revoque la sentencia de primera instancia exclusivamente en el sentido de que se **considere disuelta la sociedad de gananciales** con efectos del 05/05/2019 fecha de la separación efectiva, o del acuerdo alcanzado en junio de 2019, o bien la fecha del auto de medidas provisionales de 01/10/2019.

En orden a resolver el recurso de apelacion debe ponerse de relieve que la fecha de producción de efectos en cuanto a la **disolucion del regimen de gananciales** es la fecha de la firmeza de la sentencia de divorcio en el caso de autos, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 95 y 1392 del codigo civil, no concurriendo ninguno de los supuestos legales para que deba tenerse en cuenta otro momento distinto del establecido en el articulo 95 - 1 codigo civil, como fecha de la extinción del regimen economico matrimonial.

PROCESAL: Legitimacion del ministerio fiscal. Aclaracion y rectificacion de error

Jurisdicción: Civil

Ponente: [Emma Galcerán Solsona](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 29/06/2021

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Primera

Número Sentencia: 299/2021

Número Recurso: 210/2021

Numroj: SAP VA 980/2021

Ecli: ES:APVA:2021:980

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00299/2021

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 Fax: 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MGG

N.I.G. 47186 48 1 2019 0000056

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000210 /2021

Juzgado de procedencia: JDO.DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.1 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000149 /2019

Recurrente: Africa

Procurador: MARIA LUISA GUILLEN ZANON

Abogado: CARLOS ALBERTO NOGUÉS MEDIAVILLA

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Valentín

Procurador: , CESAR ALONSO ZAMORANO

Abogado: , MARIA-ITZIAR CURIEL LOPEZ DE ARCAUTE

S E N T E N C I A

Ilmo. Sr. Presidente: D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO SALINERO ROMÁN

D^a EMMA GALCERAN SOLSONA

En VALLADOLID, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los

autos de DIVORCIO CONTENCIOSO núm. 149/19 del Juzgado de Violencia sobre la mujer núm. 1 de Valladolid,

seguido entre partes, de una como DEMANDANTE-APELADA D^a Africa , representada por la Procuradora D^a

MARIA LUISA GUILLEN ZANON y defendida por el letrado D. CARLOS ALBERTO NOGUÉS MEDIAVILLA, y de otra como DEMANDADO-APELANTE D. Valentín , representado por el Procurador D. CESAR ALONSO ZAMORANO

y defendido por la letrada D^a MARIA-ITZIAR CURIEL LOPEZ DE ARCAUTE, habiendo intervenido el MINISTERIO

FISCAL; sobre divorcio.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 4.2.21, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Estimo parcialmente la demanda formulada por la representación procesal de Africa frente a Valentín , y en su virtud, declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por ambas partes, con los efectos legales inherentes a dicha declaración y sin expresa condena en costas a ninguna de las partes, asimismo se determinan las medidas siguientes: Se atribuye la guarda y custodia de la hija menor de forma compartida a ambos progenitores en la forma señalada en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, conservando ambos progenitores la patria potestad compartida sobre ésta.2) Cada uno de los progenitores tendrá la obligación de atender a las necesidades alimenticias en sentido estricto de su hija menor mientras la menor esté en su compañía y ambos harán frente a los demás gastos ordinarios y a los gastos extraordinarios por partes iguales. Se establece a favor de la hija el derecho a percibir una pensión de alimentos a cargo del padre de 250 € mensuales, que se actualizará anualmente conforme al IPC o índice que lo sustituya y que se ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe la madre." Dicha sentencia fue aclarada por providencia de fecha 19.2.21, que obra como sigue: "Dada cuenta; presentado el anterior escrito por el procurador Sr. Alonso Zamorano, en nombre y representación de Valentín , únase y no ha lugar a la aclaración de la sentencia, puesto que se sobreentiende que, si los intercambios no se realizan en APROME, se realizarán en el domicilio del progenitor con el que la menor se encuentre."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación de D. Valentín se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria y por el Ministerio Fiscal se presentaron escritos de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 24 de junio de los corrientes, en que ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo ponente la Ilma. Sra. D^a Emma Galcerán Solsona.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Como ha declarado esta Sala en relación con la naturaleza del recurso de apelación, entre otras, en la sentencia de 27 de noviembre de 2008, RPL-252/2018, "la más adecuada solución del mismo determina la necesidad de entrar en el examen y valoración de la prueba que obra unida a las actuaciones y ha sido tenida en consideración por la Juez de Instancia, pues el carácter ordinario del recurso de apelación -que efectivamente lo es-, somete al Tribunal que del mismo entiende el total conocimiento de la controversia suscitada, si bien siempre dentro de los límites del objeto o contenido del recurso y con respeto a la obligada congruencia. Desde esta perspectiva cabe señalar que, tal y como ya es criterio uniforme, reiterado y constante de esta misma Audiencia Provincial (Sección Primera) en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado, entre otras, en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2015, solo será factible criticar la valoración que efectúe el Juzgador "a quo" de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia fuese ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica (SSTS de 9 de marzo de 2010, 11 de noviembre de 2010); se hubiera incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002); se extrajeren de la misma conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004); o finalmente, si se adoptasen en ella criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2002)." Y en relación con la eficacia de la prueba de peritos, la Sala Primera tiene declarado (STS. de 22 de febrero de 2006, RC N° 1419/1999), que el juicio personal o la convicción formada por el informante con arreglo a los antecedentes suministrados no vincula a jueces y tribunales, que pueden apreciar esta según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a las conclusiones del perito (STS. de 16 de octubre de 1980), de las que pueden prescindir (STS. de 16 de febrero de 1994).

En relación con dicha cuestión, tiene declarado la jurisprudencia, asimismo, que los tribunales, al valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica (art. 348 de la LEC), deberán ponderar los razonamientos que contengan los dictámenes y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en las declaraciones de los peritos, pudiendo no aceptar el Tribunal el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro; debiendo también tenerse en cuenta las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten tanto de los dictámenes de peritos designados por las partes, como de los emitidos por peritos designados por el Tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones mayoritarias de los dictámenes, debiéndose examinar igualmente las operaciones periciales que se hayan realizado concretamente, los medios, métodos o instrumentos empleados y los datos en que se sustenten los dictámenes, así como la competencia profesional de sus autores y las circunstancias que hagan presumir su objetividad (SS.TS de 10 de febrero de 1994, 28 de enero de 1995, 31 de marzo de 1997, 30 de noviembre de 2010, 15 de diciembre de 2015, 17 de mayo de 2016, entre otras muchas).

SEGUNDO.- En el recurso de apelación se solicita que se revoque la sentencia de primera **instancia exclusivamente en el sentido de que se considere disuelta la sociedad de gananciales con efectos del 5/5/2019, fecha de la separación efectiva, o del acuerdo alcanzado en junio de 2019, o bien la fecha del auto de medidas provisionales de 1/10/19.**

En orden a resolver el recurso de apelación debe ponerse de relieve que la fecha de producción de efectos en cuanto a la disolución del régimen de gananciales es la fecha de la firmeza de la sentencia de divorcio en el caso de autos, de conformidad con lo dispuesto en los art. 95 y 1392 del Código Civil, no concurriendo ninguno de los supuestos legales para que deba tenerse en cuenta otro momento distinto del establecido en el art. 95-1 C.C., como fecha de la extinción del régimen económico matrimonial.

En el presente caso la demanda de divorcio se presentó en el año 2019, realizándose posteriormente los trámites legales correspondientes, con la posible repercusión de la situación derivada de la pandemia, siendo las fechas del suplico del recurso de apelación del año 2019, la separación efectiva en mayo de ese año, y las otras dos fechas son posteriores a ésta última, en el mencionado año de 2019, **por lo que debe concluirse que en el caso de autos no ha habido una separación de hecho prolongada en el tiempo** que haya desnaturalizado la institución del régimen económico de gananciales, no existiendo una justificación de la pretendida alteración de la fecha de la disolución, y por lo tanto, debe precisarse como consecuencia de ello que en la sentencia de primera instancia no existe ninguna de las notas o características negativas a que alude la doctrina jurisprudencial, reseñada en el F.D. Primero de la presente sentencia, acerca de la valoración de la prueba, que damos por reproducida en este punto, por todo lo cual, debe concluirse afirmando la procedencia de confirmar íntegramente la sentencia, desestimando el recurso interpuesto.

TERCERO.- Procede imponer a la parte apelante las costas del recurso conforme al art. 398 LEC.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Se desestima el recurso de apelación, promovido por e Procurador D. Cesar Alonso Zamorano en representación de D. Valentín , frente a la Sentencia dictada en los presentes autos por el Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Valladolid de fecha 4.2.21, confirmándola íntegramente, con imposición a la parte apelante de las costas del recurso de apelación.

La confirmación de la resolución de instancia supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, al que se dará el destino legal. (D. A. 15ª de la L.O.P.J. según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre).

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.